

# HUERTA Y CARRANZA ANTE LA OCUPACIÓN DE VERACRUZ\*

*Charles C. CUMBERLAND*

EL 21 DE ABRIL DE 1914, a las once y media de la mañana, los soldados de la marina y los marineros de los buques norteamericanos anclados en el puerto de Veracruz comenzaron a desembarcar para ocupar la ciudad, y estuvieron así a punto de dar al dictador Victoriano Huerta el apoyo que había buscado en vano durante diez años. Planeada por el presidente Wilson como un medio de desacreditar al gobierno de Huerta, la precipitada acción provocó en todo México una oleada de fervor patriótico que, por breve tiempo, dio auténtico estímulo al vacilante régimen de Huerta.

Nadie que estuviera al tanto de la situación podía ignorar que Huerta se hallaba al borde del desastre, aunque ni él mismo ni sus consejeros más cercanos parecían haberse dado cuenta de ello. Los constitucionalistas estaban invadiendo a grandes pasos y en todas partes el territorio de Huerta. Todo el Estado de Sonora, salvo el puerto de Guaymas, estaba desde hacía tiempo bajo el dominio de Obregón y de su ejército; también en Sinaloa hubo una eficaz limpieza de federales. Pancho Villa y su División del Norte no sólo habían conquistado Chihuahua, sino que, avanzando por el distrito de la Laguna, habían capturado Torreón a comienzos de abril. Al ocurrir la ocupación de Veracruz, hacía apenas una

\* Debo a los subsidios de The Social Science Research Council y de la Henry L. and Grace Doherty Charitable Foundation, Inc. el haber podido realizar en México las investigaciones en que se basa este artículo. Quisiera también manifestar mi agradecimiento al Area Research Center de Michigan State University por la generosa ayuda que me prestó con los fondos del United States-Mexican Border Project, y a la Carnegie Corporation, de la cual proceden originalmente esos fondos.

semana que Villa había logrado, en San Pedro, una sonada victoria sobre uno de los mejores generales de Huerta. Además, los hermanos Arrieta lograron conquistar para los constitucionalistas el Estado de Durango, y Pánfilo Natera llegó a dominar el Estado de Zacatecas, exceptuando su capital.

Hasta en Tamaulipas, Nuevo León, y Coahuila, donde los revolucionarios peleaban bajo el mando del no muy brillante Pablo González, los federales habían tenido que replegarse a las ciudades más importantes, condenadas a su vez a caer en pocos días. De las ciudades situadas en la frontera con los Estados Unidos, sólo Nuevo Laredo y Piedras Negras (Ciudad Porfirio Díaz) permanecían en poder del gobierno; todas las demás, desde Matamoros hasta Nogales, estaban en poder de los constitucionalistas, y gracias a ello tenía asegurado Carranza el paso de gran cantidad de materiales bélicos, comprados en los Estados Unidos después de que se levantó el embargo de armas en febrero de 1914.

En otras partes del país era mejor la situación del llamado gobierno federal, pero aun en las regiones que se suponían bajo el dominio de Huerta, sólo los principales centros de población se hallaban bien protegidos; las partidas de revolucionarios recorrían a su antojo el interior del país, destruyendo las vías de comunicación, atacando a las patrullas, en una palabra, causando estragos dondequiera. En todos los sectores, los encuentros en gran escala iban acompañados de fuertes desertiones de huertistas al bando enemigo; el ejército tenía dificultad para mantener el número necesario de hombres, y las municiones escaseaban. El gobierno, prácticamente impotente para resolver tamaños problemas, sólo lograba reunir fondos con préstamos forzosos y otros procedimientos igualmente detestados por nacionales y extranjeros; completaba las filas de su ejército con levas, y en ocasiones se veía obligado a incautarse de víveres y otros artículos que los comerciantes se negaban a vender al dictador. La gran mayoría del pueblo no sentía entusiasmo alguno por esa lucha contra los constitucionalistas, y de nada le habían valido a Huerta sus muchos intentos de crear ese entusiasmo.

La ocupación de Veracruz fue consecuencia de un suceso

ocurrido en Tampico: un grupo de marineros no armados y un oficial de uno de los buques de guerra norteamericanos fueron arrestados y llevados públicamente a través de las calles por orden del coronel Ramón Hinojosa, comandante huertista de la localidad. Los hombres no tardaron en salir libres, y las autoridades ofrecieron sus excusas. Con todo, el almirante norteamericano exigió, como desagravio, una salva de veintidós cañonazos. Como éste no fue sino uno de tantos incidentes en que los subalternos de Huerta habían molestado a ciudadanos norteamericanos, el presidente Wilson insistió en que Huerta le diera satisfacción. Huerta accedió, pero a condición de que se levantara un protocolo formal —lo cual hubiera constituido una forma de reconocimiento—, y entonces Wilson, el 20 de abril, presentó la cuestión ante el Congreso, pidiendo que se aprobara su plan de “servirse de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la forma y en la medida” necesarias para obligar a Huerta a satisfacer las demandas. La Cámara dio su aprobación en la tarde del mismo día; el Senado debía estudiar la resolución la tarde del 21 de abril; pero Veracruz ya había sido ocupada.

NO PARECE haber motivo alguno para dudar de que el Presidente de los Estados Unidos proyectaba una drástica acción militar de un modo u otro, pero es evidente que la ocupación del puerto se debió a una decisión no premeditada, provocada por una serie de circunstancias de índole distinta. Los Estados Unidos no se hallaban preparados para intervenir en el momento en que lo hicieron. Wilson se había opuesto al régimen de Huerta desde sus comienzos, y se mostró doblemente disgustado cuando supo (por un agente confidencial, enviado a México con ese preciso objeto) que el embajador norteamericano en México, Henry Lane Wilson, había desempeñado, muy probablemente, un papel importantísimo en el establecimiento del gobierno de Huerta. A este descubrimiento siguió la misión de Lind, que no logró realizar nada en concreto, y el Presidente se vio obligado a emplear otros medios para hostilizar a Huerta. Mantuvo el embargo de armas, decretado en 1912 para restar fuerzas a la rebelión

de Orozco, pero sólo mientras Huerta tenía en su poder las principales ciudades fronterizas. Cuando los constitucionalistas se adueñaron de la mayoría de las aduanas, Wilson levantó el embargo, permitiéndoles la compra de pertrechos.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de Wilson era, por decir así, matar de hambre a las fuerzas militares de Huerta, no ha de sorprendernos su decisión de impedir, en la medida de lo posible, que Huerta recibiera armas de otras fuentes; fue justamente la aparición de municiones alemanas la que precipitó la ocupación de Veracruz. En la noche del 20 de abril, Mr. W. W. Canada, cónsul norteamericano en este puerto, informó al Departamento de Estado que a la mañana siguiente debía entrar en Veracruz el vapor "Ypiranga" para descargar doscientas ametralladoras, quince millones de cartuchos y otros artículos urgentemente necesitados; estaban ya listos los trenes que debían llevar todo ello a los frentes de batalla. En unas cuantas horas se ordenó al almirante Fletcher que ocupara el puerto, a pesar de que el grueso de las fuerzas de desembarco estaban entonces en Tampico. El "Ypiranga" fue detenido antes de entrar en el muelle, y las primeras fuerzas norteamericanas pisaron suelo veracruzano aproximadamente en el momento mismo en que debía iniciarse el desembarco del precioso cargamento del "Ypiranga".

En vista de las circunstancias en que se emprendió la ocupación y de la frecuencia con que el presidente Wilson había manifestado su simpatía por el pueblo mexicano (siempre establecía una distinción entre "el pueblo mexicano" por un lado, y Huerta y sus partidarios por el otro), los funcionarios de Washington esperaban que los constitucionalistas aplaudieran la intervención o que, en todo caso, se mantuvieran completamente neutrales. Se esperaba también que el pueblo mexicano comprendiera y aprobara este evidente intento de debilitar el régimen de Huerta. Estas esperanzas pusieron de manifiesto la ingenuidad casi inverosímil de los funcionarios de Washington y su radical ignorancia de la historia de las relaciones mexicano-norteamericanas. Así, los Estados Unidos no pudieron menos que experimentar sorpresa y pena

cuando se encontraron con la hostilidad de todos: huertistas, constitucionalistas y neutrales.

Era de esperarse una reacción de los huertistas. A nadie sorprendió, por lo tanto, que los ciudadanos norteamericanos, y en especial los funcionarios diplomáticos, sufrieran molestias de todo orden, insignificantes o serias. Mr. Bonney, cónsul de San Luis Potosí, fue arrestado por el comandante militar de la localidad; se le mantuvo preso durante breve tiempo, y luego se le dejó en libertad con la condición de que abandonara el país. Mr. Silliman, vicecónsul de Saltillo, fue llevado preso junto con su asistente; el ejército ocupó las oficinas del consulado y obligó a un empleado, bajo amenaza de la vida, a abrir la caja fuerte, de la cual se sacaron y confiscaron el registro de claves y otros papeles oficiales. El empleado fue puesto en libertad en seguida, en vista de la escasa importancia de su puesto, pero Silliman quedó incomunicado durante algunos días y luego puesto bajo la custodia del cónsul británico con la orden de partir en seguida. En su viaje de México a Veracruz, Silliman fue víctima de no pocas vejaciones, y llegó al puerto, el 26 de mayo, muy enfermo.

Pero las peores represalias recayeron en Philip C. Hanna, cónsul general de los Estados Unidos en Monterrey, el cual, en muchos sentidos, era entonces el más importante de los funcionarios norteamericanos de México. En la tarde del 21 de abril el ejército echó abajo todas las banderas estadounidenses que había en la ciudad, comenzando con la del Consulado general; algunas fueron quemadas, otras desgarradas, y sus restos quedaron dispersos en jirones por las calles. Todo el personal del Consulado general tuvo que permanecer, bajo custodia, en el edificio. A la mañana siguiente se hizo en éste una inspección minuciosa y destructora y se arrestó a Hanna. Acusado de simpatizar con los constitucionalistas, fue paseado por las calles como un vulgar delincuente, llevado primero a la penitenciaría y luego al palacio de gobierno; sufrió malos tratos y estuvo incomunicado algún tiempo. El palacio de gobierno, centro de la resistencia contra el ataque constitucionalista que en esos momentos se estaba lanzando, fue abandonado la noche del 23 de abril. Los

huertistas dejaron a Hanna encerrado en el edificio, sin alimentos ni comodidades de ninguna especie, y sin hacerle saber que estaban desalojando el edificio y la ciudad. Sólo quedó en libertad la mañana del 24 de abril, cuando los victoriosos revolucionarios supieron lo ocurrido. El trato que recibió de parte de los constitucionalistas fue tan respetuoso como brutal había sido el de los huertistas.

HUERTA MISMO se dio cuenta de la oportunidad que le había brindado el gobierno de Wilson. Unas cuantas horas después de iniciada la ocupación de Veracruz, el Congreso, siempre servil a sus antojos, le concedió poderes extraconstitucionales; ya con ellos, decretó una amnistía general para todos los rebeldes que se rindieran en un plazo de quince días. La amnistía, según declaró, permitiría a todos los mexicanos cumplir con la obligación de defender a la patria, hollada por el invasor extranjero. No se sabe cuántos fueron los rebeldes que aprovecharon la ocasión y se rindieron, pero lo cierto es que se produjo en seguida una reacción favorable al gobierno de Huerta. Fue tal el alud de voluntarios, que en dos días pudo desistirse del programa de levas forzosas, y las autoridades no sabían qué hacer con tantos reclutas.

El Comité Civil de la Defensa Nacional envió a los Estados de Veracruz y Puebla una comisión encargada de hablar con los grupos de trabajadores, los jefes de pequeñas partidas rebeldes y otras organizaciones hostiles o neutrales; el informe dado por el Comité a principios de mayo fue decididamente alentador. Según su director, Samuel Espinosa de los Monteros, la mayoría de los jefes rebeldes con quienes habló se comprometieron a cooperar con los federales y llegaron a aceptar una tregua indefinida para luchar contra los invasores en apoyo de los federales, aunque es verdad que se negaron a abandonar la revolución y a unirse de plano a las fuerzas del gobierno.

Juan Lechuga, uno de los revolucionarios de segundo orden que más triunfos había logrado en esa región, publicó un aviso en que anunciaba la suspensión de la lucha contra Huerta a fin de combatir contra los yanquis. La Unión Obre-

ra Mexicana expidió un manifiesto para pedir a todos sus miembros que olvidaran los rencores del pasado y se unieran al gobierno de Huerta para defender el país. La Asociación Mutualista de Dependientes de Orizaba aceptó hacer las veces de una agencia de reclutamiento de voluntarios. Millares de hombres, de casi todos los pueblos y ciudades situados entre la capital y la costa, escribieron al gobierno ofreciendo sus servicios. Si Huerta no pudo reunir un enorme ejército, fue sólo por falta de armas y municiones.

Las regiones dominadas aún por Huerta le ofrecieron también su apoyo. El gobernador de Zacatecas, Luis Medina Barrón, hizo saber que varios grupos, integrados sobre todo por maestros, habían formado comités patrióticos para ayudar al gobierno. Muchos mineros de Guanajuato y de Hidalgo se organizaron para dinamitar las vías de comunicación y acosar en otras formas a los invasores. De Jalisco y Michoacán llegaban peticiones de armas para voluntarios.

Todos estos hechos contribuyeron sin lugar a dudas a fortalecer momentáneamente a Huerta en las zonas que seguían bajo el poder de sus generales y, por lo tanto, a retardar el avance de la revolución. Pero la región de mayor importancia era el Norte. De la reacción de Carranza, Calles, Obregón, Villa, Pablo González y otros revolucionarios de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas dependía la importancia de lo ocurrido en Veracruz, lo mismo en cuanto a las relaciones entre México y los Estados Unidos que en cuanto al progreso de la revolución. Si los jefes antihuertistas aceptaban la intervención de Wilson como una muestra de favor para la revolución y como un ataque dirigido sólo a Huerta, el triunfo de su causa se aceleraría gracias a la cooperación norteamericana; pero si consideraban el incidente de Veracruz como un ataque a la soberanía mexicana y se volvían en contra de los Estados Unidos, cooperando con Huerta, el avance militar de los revolucionarios cesaría inmediatamente.

Los ESTADOS UNIDOS hicieron todo lo posible por que los constitucionalistas comprendieran claramente el fundamento y la

significación de la ocupación de Veracruz; se ordenó a los cónsules y demás agentes del gobierno de Washington que hicieran ver a los revolucionarios norteamericanos cómo la ocupación no significaba una guerra, ni tampoco una medida hostil a la revolución o a México; no se quería atacar al pueblo mexicano ni humillar su soberanía. Bryan, secretario de Estado, confiaba en que los constitucionalistas expresarían su aprobación o, si no, se mantendrían "ajenos a la controversia".

La reacción de los generales constitucionalistas no fue unánime, pero la mayoría de ellos dieron a la ocupación de Veracruz una interpretación radicalmente opuesta a la deseada por Washington. Obregón, en una de sus cartas al comandante federal de Guaymas, le decía que no le ayudaría en la defensa del puerto contra los Estados Unidos, pero que si los federales se veían forzados a retroceder, no impediría su retirada y atacaría él mismo a los invasores. Aconsejó a Carranza que declarara la guerra inmediatamente, fundándose en que, al final de una guerra con los Estados Unidos, serían los revolucionarios y no el gobierno de Huerta quienes entablaran negociaciones con Washington, lo cual era una manera de asegurar el triunfo de su causa. José María Maytorena, gobernador de Sonora, se sentía desconcertado y no sabía qué hacer; lo tenían preocupado los rumores de que todos los ciudadanos norteamericanos estaban abandonando el Estado. El pueblo de Sonora no parecía especialmente alarmado por la ocupación de Veracruz; en general no se molestaba a los extranjeros, aunque se decía que en Cananea había agitadores que incitaban a la gente a atacar a chinos y norteamericanos.

En Tamaulipas, extremo oriental de la línea de ataque constitucionalista, no se notó particular inquietud; los generales Pablo González, Antonio Villarreal, Jesús Carranza y otros parecían dispuestos a obedecer en todo al Primer Jefe. En Matamoros, el coronel Ricey hizo una visita oficial al cónsul de los Estados Unidos para asegurarle que los norteamericanos no tendrían nada que temer en ese distrito y que, aun en caso de guerra, no se lucharía en Matamoros; el coronel constitucionalista afirmó que los hombres que estuvieran bajo su mando no combatirían contra los Estados Unidos y

que de ningún modo se unirían a Huerta. En esta conversación Rícey se presentó como portavoz de Carranza, pero sus puntos de vista no coincidían del todo con los de éste.

Y justamente el Primer Jefe —lo mismo que Villa y sus generales, que por entonces se encontraban en Chihuahua— estaba provocando cierta inquietud en Washington. A los funcionarios norteamericanos no les interesaba mayormente la actitud de Obregón, Pablo González y otros militares del mismo rango. Carranza, Primer Jefe de las fuerzas constitucionalistas, era quien se había arrogado la facultad de tomar todas las decisiones tocantes a las relaciones internacionales; la mayoría de sus partidarios le concedían ese derecho y le confiaban todos los problemas de trascendencia internacional. La inmensa mayoría de los revolucionarios estaban también convencidos de que, como dijo Adolfo de la Huerta, Carranza sabría dirigir dignamente a los mexicanos y buscaría siempre el bien del país. Pero Villa y sus generales no confiaban tanto en Carranza como De la Huerta y otros, y resultaba evidente que Villa no se plegaría a las órdenes de Carranza si éstas diferían de sus propias ideas sobre la justicia o la injusticia de la ocupación de Veracruz. La capital de Carranza era en esos momentos Chihuahua, adonde Villa y algunos de sus generales habían ido a reunirse con el Primer Jefe después de la gran victoria de San Pedro de las Colonias, el 12 de abril. Así, pues, Carranza tenía a su lado a los principales generales de la División del Norte en los momentos mismos de la ocupación de Veracruz. Había habido algunas discusiones acaloradas entre Villa y Carranza, sobre todo en lo tocante a la gubernatura de Manuel Chao; de ahí que Villa no se sintiera dispuesto a seguir ciegamente a Carranza después del 21 de abril; los agentes de los Estados Unidos estaban al tanto de esas diferencias de opinión y temían sus consecuencias.

SIGUIENDO las instrucciones del secretario de Estado Bryan, George C. Carothers dio oficialmente a Carranza la noticia de la ocupación, y explicó al Primer Jefe la posición adoptada por el presidente de los Estados Unidos; le hizo notar

que Wilson no pedía al Senado una declaración de guerra, sino únicamente una resolución que apoyara su derecho de servirse de las fuerzas armadas para reparar una injusticia. Carranza contestó por escrito al día siguiente. En sus instrucciones a Carothers, Bryan había observado que "los periódicos afirman que los constitucionalistas se mantienen ajenos a la controversia", y que ésta era una "actitud muy acertada". Pero la respuesta de Carranza, más que de indiferencia, hacía gala de pasión; el cónsul Marion Letcher supuso que los generales de Villa habían obligado a Carranza a mostrarse enérgico; sin embargo, su respuesta fue puramente personal: reflejaba sólo sus propias ideas.

Carranza se manifestaba sorprendido y aun herido por lo que había hecho en Veracruz la armada de los Estados Unidos; su respuesta, según declaraba, era un intento de agotar todos los medios honrosos para llegar a un acuerdo pacífico y evitar la guerra. En esencia, juzgaba que la ocupación de Veracruz era injusta, puesto que se basaba en un razonamiento equivocado. Huerta era un ciudadano particular, y nada más; en cuanto tal, no podía recibir una demanda de satisfacción por parte del gobierno norteamericano, puesto que no era un jefe de Estado legítimo. Los tribunales mexicanos llamarían a cuentas a Huerta, en cuanto individuo, por lo que había hecho, y los Estados Unidos no tenían por qué intervenir para precipitar ese juicio. Carranza temía que el incidente de Veracruz provocara una guerra, que hasta ese momento habían deseado evitar los mexicanos, y la única manera de conjurar la guerra era evacuar inmediatamente el puerto. Hecho esto, el gobierno constitucionalista se haría cargo con todo gusto del asunto de Tampico y hablaría sobre las reparaciones adecuadas.

No cabe duda de que Carranza temía una guerra con los Estados Unidos a resultas de la ocupación de Veracruz. Una vez despachada su respuesta oficial, fue a hablar con Letcher; éste debía pedir al presidente Wilson que buscara un medio para impedir una guerra catastrófica, y al mismo tiempo debía rogarle que respetara el modo de sentir del pueblo mexicano. Carranza no temía que los Estados Unidos extendieran

la ocupación de Veracruz hasta el punto de convertirla en guerra; sabía cuál era la actitud de Washington. Lo que temía era verse obligado a declarar la guerra a los Estados Unidos para impedir que los revolucionarios se unieran al gobierno de Huerta, haciendo causa común contra el invasor.

También Villa abrigaba ciertos temores; el más importante era que la actitud beligerante de Carranza llevara a una ruptura entre los constitucionalistas y los Estados Unidos. No olvidaba la pendencia que había tenido con el Primer Jefe a propósito de Chao, y desconfiaba de los consejeros carrancistas, a quienes calificaba desdeñosamente de "perfumados" y "chocolateros". Esta desconfianza le hacía poner en duda la prudencia de las decisiones adoptadas por Carranza en el asunto de Veracruz. Lo que más importaba a Villa era que la revolución siguiera adelante; no se atormentaba con cuestiones académicas como la de la soberanía, y sólo ansiaba el avance de la revolución. Cuando llegó a sus oídos el rumor de que los Estados Unidos iban a imponer nuevamente el embargo de armas en la frontera, se dirigió apresuradamente a Ciudad Juárez para conversar con Carothers, con el cual cenó la noche del 23 de abril. Le hizo ver que a él no le interesaba Veracruz; por lo que a él tocaba, los Estados Unidos podían quedarse en el puerto cuanto quisieran. Se burló de la actitud de Carranza y de su respuesta, y afirmó que a él le bastaba con que los Estados Unidos mostraran su simpatía para con el pueblo mexicano permitiendo a los revolucionarios la compra de armas y municiones. Pero advirtió a Carothers que, en caso de declararse la guerra, él lucharía contra los Estados Unidos, aunque él y sus hombres tuvieran que vivir de hierbas de los cerros. Dos días después confirmó su actitud en un despacho dirigido al presidente Wilson; calificaba ahí de puramente personal la respuesta de Carranza, y decía que no tenía suficiente importancia para provocar una guerra entre los dos países amigos.

Al repudiar tan abiertamente la posición adoptada por Carranza, Villa provocó la indignación de los carrancistas, que consideraban esa acción como de lesa majestad. Los agentes de Carranza se esforzaron por restar importancia a la

diferencia de opinión que había surgido entre los dos jefes, y llegaron al extremo de censurar las declaraciones de Villa que se publicaban en la prensa, haciéndolas parecer muy semejantes a las de Carranza.

Pero la verdad es que las actitudes de Villa y de Carranza no eran tan radicalmente distintas como parecería a primera vista. Carranza temía la guerra tanto como Villa; lo que pasa es que sentía le presión de dos fuerzas, y que, en sus declaraciones oficiales, trató de encontrar un equilibrio entre ambas. Muy bien se daba cuenta de que la ocupación de Veracruz tenía el propósito de ayudar a los revolucionarios y que no reflejaba ninguna hostilidad de los Estados Unidos para con el pueblo mexicano o para con los constitucionalistas; veía también que el incidente no era una afrenta deliberada a la soberanía mexicana, aunque en resumidas cuentas la dejaba mal parada. No había ninguna malicia, sino simple torpeza. Así, pues, estaba plenamente dispuesto a buscar una solución pacífica al conflicto, y hasta se ofreció a enviar a Washington a un alto comisionado con plenos poderes. (Teniendo en cuenta que Carranza nunca fue amigo a delegar su autoridad, aunque se tratara de asuntos de segunda importancia, su decisión de dar en esta ocasión plenos poderes a un agente da prueba de su gran inquietud.) Por otra parte, veía que no le convenía mostrar debilidad, y, a fin de poner coto a la terrible oleada de apoyo a Huerta, pensó que debía adoptar una posición firme y aun ofensiva frente a la intervención de los Estados Unidos. Carranza veía, mucho mejor que los funcionarios de Washington, que la ocupación de Veracruz significaba un peligro para la revolución, entre otras cosas porque servía de propaganda al gobierno de Huerta. Condenando públicamente la acción de los Estados Unidos y adoptando una actitud amenazadora, esperaba poner remedio a las sensibilidades heridas y destruir la eficacia de la propaganda huertista; pero en sus charlas con el cónsul Letcher procuraba atenuar la agresividad de sus comunicaciones oficiales.

EL SECRETARIO DE ESTADO Bryan interpretó la situación en forma totalmente errónea y se mostró dispuesto a entablar nego-

ciaciones sobre una base amistosa, pero insistió en que Carranza hiciera declaraciones públicas más acordes con lo que le decía a Letcher. Quería que Carranza dijera claramente que los constitucionalistas se mostraban "neutrales con respecto a todos los problemas que se han presentado y puedan presentarse" entre Huerta y los Estados Unidos. Según Bryan, se estaban dando a Huerta motivos para pensar que los constitucionalistas se unirían a él contra los Estados Unidos; bastaba que Carranza hiciera declaraciones públicas para dar al traste con ese error y apresurar la caída de Huerta.

La reacción de Bryan debe de haber desconcertado a Carranza; le era imposible acceder a las propuestas de Washington. Temía —y su temor era mucho más justificado que la convicción de Bryan— que una declaración pública como la que se le pedía provocara una ruptura seria dentro de las fuerzas constitucionalistas y ayudara a Huerta, en vez de perjudicarlo. Pero las consideraciones políticas y su misma personalidad, que no le permitía humillarse ante nadie y por ningún motivo, impidieron a Carranza elucidar esas cuestiones en forma oral o escrita. No podía sino insistir en la justificación moral y política de su posición hostil e intransigente.

El peligro que la ocupación de Veracruz significaba para la revolución era apremiante; su intensidad aumentaba a medida que pasaba el tiempo y no se encontraba solución al problema. Cuando aún hervían los ánimos y se difundían rumores de que los Estados Unidos declararían la guerra, los representantes diplomáticos de la Argentina, el Brasil y Chile en los Estados Unidos ofrecieron, el 25 de abril, actuar de intermediarios. Los Estados Unidos aceptaron en seguida la oferta, con muestras de agradecimiento; Huerta la aceptó tres días después y Carranza, en principio, al poco tiempo. Una vez aceptada por Huerta y los Estados Unidos la intervención de los tres países, el peligro parecía conjurado. Al comprometerse los Estados Unidos a seguir una política de no beligerancia contra México, Huerta no podía ya usar las probabilidades de guerra como arma de propaganda.

Huerta cometió así un grave error y debilitó sobremanera su posición en México; a partir de entonces resultaron vanos

todos sus esfuerzos por convencer a los constitucionalistas de que era un deber patriótico apoyar a su gobierno; y al par que menguaba el poder de Huerta, prosperaba el de Carranza. Mientras existía la posibilidad de que los revolucionarios se vieran forzados a apoyar a Huerta, Carranza estaba dispuesto a admitir la mediación, con tal de que en esto no se comprometiera la dignidad de los constitucionalistas. Pero a medida que desaparecía el peligro, iba perdiendo interés en el plan de mediación; mientras en Niágara los representantes de los Estados Unidos y los del gobierno de Huerta entablaban interminables conversaciones con los mediadores, los constitucionalistas lograban victoria tras victoria: Tampico, Paredón, Saltillo, Tepic, Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas... Cada nueva victoria iba haciendo más seguro el éxito definitivo de los revolucionarios y minando el empeño de Huerta de aprovechar la ocupación de Veracruz para sus propios fines. En junio, Huerta sabía perfectamente que su gobierno estaba perdido; pero todavía a esas alturas esperaba que ocurriera un milagro y que los Estados Unidos lo reconocieran y le prestaran ayuda. El Congreso, que había suspendido sus labores el 17 de junio, fue convocado en seguida a una sesión especial, porque Huerta quería someterle todas las proposiciones que llegaran de Niágara. Para estas fechas ya no contaba con la posibilidad de sacar fruto a lo de Veracruz; fundaba sus esperanzas en un apoyo de los Estados Unidos.

Así terminó el incidente de Veracruz, aunque las fuerzas de ocupación no se retiraron ni devolvieron el puerto a las autoridades mexicanas sino varios meses después de la fuga de Huerta. Entre agosto y noviembre, Carranza estuvo solicitando periódicamente la devolución del puerto, pero el tono de sus peticiones era muy diferente del que había empleado el 22 de abril, cuando hablaba de declarar la guerra. Ideada por bienintencionados pero ineptos funcionarios de Washington como un medio de ayudar a los constitucionalistas, la ocupación de Veracruz estuvo a punto de ayudar a Huerta, y si no lo logró fue sólo por la torpeza del dictador y por la perspicacia de Carranza.